

Privatizaciones estratégicas y proyecto de no-nación: el caso de la industria petroquímica

Luis González Souza*

¿POR QUÉ oponerse a la privatización de la industria petroquímica en México? Ésta no es una interrogante intrascendente. En el fondo se juegan muchas cosas de indudable importancia. Pero éstas jamás se entenderán, si se analiza el asunto fuera de contextos: nacional e internacional, históricos y prospectivos, teóricos y prácticos.

Y es precisamente la falta de contexto, lo que caracteriza a las posiciones simplistas en torno a éste, como a muchos otros temas. Posiciones que se resumen en el más vulgar de los mercantilismos: ver a la privatización de la petroquímica sólo como un asunto de pesos y centavos o, a lo sumo, de empleos e inversiones. Lo que más bien sirve para develar el matrimonio de las cúpulas gubernamentales y empresariales que hoy dictan el no-futuro de México, bajo la bendición de una “modernización” de plano chata, tecnocrática.

Lo cierto es que en la pretendida privatización de la petroquímica mexicana, están implicadas cuestiones de desarrollo econó-

mico, de soberanía, de cultura e identidad, de seguridad nacional, de democracia, e inclusive de visiones sobre el futuro del país y de la humanidad. Oponerse a las privatizaciones sólo porque sí, es algo que alimenta regresiones a un estatismo caduco. Favorecer, en el otro extremo, todo tipo de privatizaciones, equivale a alimentar un virtual suicidio nacional.

CONTEXTO TEÓRICO E INTERNACIONAL

Nunca estará de más advertir que el suicidio de las naciones subyugadas, como la nuestra, es precisamente lo que a final de cuentas buscan los promotores de la actual globalización; una globalización tan antidemocrática como desnacionalizadora.

Tales promotores buscan edificar un orden mundial dizque nuevo, afincado en el viejo empeño de liquidar las soberanías nacionales en tanto estorbos a un libertinaje absoluto del capital y del mercado. Pero con una sal-

95

*Autor de *México en la estrategia de Estados Unidos*, Siglo XXI, 1993; y de *Soberanía herida*, Nuestro Tiempo, 1994; articulista de *La Jornada* y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

vedad: las potencias sí se reservan para sí mismas el derecho a la soberanía, e inclusive reactivan sus proteccionismos y chovinismos, al tiempo que los nuevos conglomerados transnacionales se reservan la fuerza para hacer de esta globalización, el ariete para seguir acumulando tanto riquezas como poder. El ariete para instaurar un gobierno mundial *de facto*, tan invisible como ilegítimo y dictatorial.

En ese proyecto de desnacionalización para los de abajo, para los aherrojados por gobiernos tan “modernos” como serviles, la privatización de empresas públicas juega un papel clave. El proyecto se monta sobre un pedazo exacto, pero sólo un pedazo, de la realidad: el viejo estatismo dejó de ser un pivote del crecimiento económico, para convertirse en una fuente de calamidades. Éstas van desde los despilfarros e ineficiencias derivadas de la corrupción y del gigantismo burocrático, hasta la asfixia de las energías creativas de la sociedad. Montado en esto, que nadie puede negar, tal proyecto de globalización se va desplegando en busca de privatizar no sólo las empresas estatales. También se busca privatizar –a veces se dice, adelgazar– al estado mismo.

No hay que ser mago para adivinar el saldo final. Con un estado adelgazado hasta la agonía, queda bien pavimentado el camino para que los grandes capitales hagan por completo de las suyas; para que todo en la sociedad se reduzca a una cuestión de dinero y negocios; para que las potencias acaben de someter a las naciones débiles. Y, en fin, queda pavimentado el camino para que las naciones atrasadas, lejos de modernizarse, se desfiguren por completo al tiempo que se transforman en simples traspatios, sótanos o

súbditos de los nuevos emperadores de la economía global.

Con la privatización del propio estado nacional, éste deja de ser estado y deja de ser nacional. Más bien tiende a convertirse en una agencia más para el libre flujo transnacional del capital privado. Y allí podrá hablarse de todo, menos de un proyecto nacional.

No sobra añadir que, al igual que la globalización en curso, las privatizaciones tienen consecuencias muy distintas en el mundo desarrollado y en el submundo no desarrollado. Para países como el nuestro, la privatización es sinónimo de extranjerización; y, a su vez, esta última es sinónimo de desnacionalización, de vaciamiento de la soberanía.

Tampoco aquí hay que ser mago para saber por qué ocurre así, tal y como ha ocurrido desde que México comenzó su “cambio estructural”, luego profundizado, hasta la fecha, bajo el nombre de “modernización”. ¿Quién si no el empresariado gigante tiene los recursos económicos, políticos y aun corruptivos para ocupar cada uno de los espacios importantes que se abren con cada privatización? Además, si desde siempre el empresariado mexicano ha mostrado gran inmadurez para valerse por sí mismo, ¿cómo podría ahora, en plena globalización, aprovechar lo privatizado sin subordinarse más y más, de manera directa o indirecta, al capital extranjero?

Para ser exactos, en el caso de México la privatización se ha traducido en una desnacionalización a cargo, no de una extranjerización abstracta sino, específicamente, de una norteamericanización galopante. Así lo ha demostrado la historia reciente de nuestro “cambio estructural modernizador”. Del mis-

mo modo en que la historia ha demostrado que es precisamente en Estados Unidos, durante el primer gobierno de Reagan, donde cuaja por vez primera la globalización como proyecto hegemónico; concretamente, bajo la doctrina del neoglobalismo.

PRIVATIZACIÓN DE LA PETROQUÍMICA: SUBLIMACIÓN DEL PROYECTO DESNACIONALIZADOR

En los gobiernos del “cambio estructural modernizador” de México –De la Madrid, Salinas y ahora Zedillo– el proyecto globalizador de Estados Unidos ha encontrado un fiel y eficiente servidor. O, por decirlo con el lenguaje inaugurado por el TLC, un socio de primer nivel (que no del Primer Mundo). Directamente, o a través del Banco Mundial y del FMI, Estados Unidos ha logrado que México, en palabras de esas mismas instituciones, se erija en un “modelo”, en un “campeón” de las privatizaciones, así como de otras directivas clave del neoliberalismo.

Primero, el gobierno de De la Madrid se encargó de inaugurar la carnicería privatizadora al disminuir el número de empresas estatales y paraestatales, de 1,155 a unas 600 empresas. Conviene aquí mismo advertir que las cifras oficiales son tan contradictorias y oscuras como otros mitos y metodologías de lo genial. En todo caso, es justo señalar que dicho gobierno sólo se atrevió a cortar mucha grasa pero poco nervio.

Fue el siguiente gobierno, el mismo que inflara el enorme globo de la “modernización” salinista, quien de manera sistemática comenzó a introducir el cuchillo privatizador en áreas vitales del cuerpo mexicano. Áreas

cuya importancia estratégica va más allá de lo económico. En lo social, las bajas abarcaron desde la privatización parcial de Conasupo, hasta la virtual privatización del ejido, gracias a la (contra)reforma del artículo 27 constitucional. En lo cultural, desde la privatización de empresas con enorme valor inclusive histórico, como la minera Cananea, hasta fuertes empujones para la privatización, más o menos silenciosa, del sistema educativo. En lo económico, desde la reprivatización de la banca hasta la venta de complejos industriales tan importantes como Sidermex.

Y ya desde el salinato, la fiebre privatizadora comenzó a tocar fibras ligadas de manera directa a la seguridad nacional del país. Comenzó a afectarse puertos, comunicaciones y transportes de todo tipo: desde el puerto de Veracruz hasta aerolíneas como *Mexicana*, pasando por la privatización total de *Teléfonos de México*.

El nuevo gobierno zedillista no ha hecho sino profundizar la línea privatizadora, y amenaza con llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y no por casualidad, esa línea comienza a extremarse en cuanto se firma con el gobierno de EE.UU., en febrero de 1995, el paquete financiero para encarar la última –hasta ahora– macrodevaluación del peso mexicano. A partir de entonces se prepara el terreno para iniciar o consumir la privatización en áreas de evidente importancia estratégica como las telecomunicaciones y los energéticos de todo tipo.

Destaca, en particular, todo lo concerniente a la industria petrolera, pues ésta encarna valores estratégicos en las más diversas áreas. En lo económico, como palanca no sólo del crecimiento sino de una eventual industrialización. En lo social, como una singular fuente de empleos lo mismo que de in-

gresos tributarios. En lo cultural, como una industria que gracias a la expropiación de 1938, ya es un símbolo y a la vez acicate de las mejores tradiciones que dan identidad a México, comenzando con la autoconfianza en la capacidad técnica y política de los mexicanos. En lo político, como un espacio estratégico para que el estado –obviamente otro estado y no el actual– pudiera hacer frente a la ola privatizadora y así recuperar fuerza, capacidad rectora y hasta dignidad. Y en lo que concierne directamente a la seguridad nacional, la industria petrolera de México podría y debería jugar un papel de dique ante las ambiciones desmesuradas de Estados Unidos. Ambiciones que se expanden desde la garantía de una fuente segura y cercana para el crecimiento económico, hasta la de un soporte logístico para aventuras bélicas, eventual e irónicamente, contra el propio México.

Pese a tanta importancia, la industria petrolera vista en su conjunto –como siempre debe verse– también ya ha comenzado a privatizarse, aunque de manera subrepticia, desde los tiempos del “cambio estructural”. Por ejemplo, el gobierno de De la Madrid inauguró el truco de reclasificar productos de la petroquímica básica para incorporarlos a la petroquímica secundaria, abriéndolos así a la inversión privada. Luego, el gobierno de Salinas procedió a destazar administrativamente a Pemex, como para facilitar su venta silenciosa, pedazo por pedazo. Antes, entonces, y ahora mismo, a Pemex se le destaza presupuestalmente; se le empuja hacia su deterioro, para justificar, acaso pronto, su dizque inevitable privatización.

Aparte de coadyuvar en ello, el gobierno de Zedillo ha buscado –infructuosamente, has-

ta ahora– consumir la privatización, por lo pronto de la industria petroquímica y, acaso como premio de consolación para quienes así lo exigen, la privatización de la industria eléctrica. Muy probablemente después, se empujará la privatización de la industria petrolera toda, tal como lo demandan, de tiempo atrás, todos los círculos más poderosos y conservadores de Estados Unidos: desde la *Heritage Foundation* hasta la *Business Roundtable*, pasando por los “halcones” del gobierno.

Vista la importancia multiestratégica de la industria petrolera en México, su plena privatización ya no significaría un corte a la grasa del estado, ni un corte a tal o cual nervio. Más bien parecería una puñalada directa al corazón. El cuchillo se afila ahora mismo, y por lo pronto apunta al ventrículo de la petroquímica.

De esa manera se estaría dando una especie de puntilla al ya largo proceso de desnacionalización con el consiguiente vaciamiento de soberanía. Quien debería velar directamente por ésta, el estado, estaría llevando su adelgazamiento al punto del suicidio. Si el estado mexicano ya ni siquiera puede salvaguardar a la industria petrolera, entonces estaría culminando su virtual transformación en una agencia privada. En consecuencia, se estaría coronando el “moderno” proyecto de no-nación.

Al llegar a tal punto la autoextinción del estado, incluida la autoinmovilización para ejercer soberanía, la viabilidad de México como nación independiente quedaría por completo a la deriva. De hecho esto ya comienza a advertirse en todos y cada uno de los impactos desintegradores del “cambio estructural modernizador”. Impactos que incluyen

la paulatina pero perseverante desintegración de la economía, de la sociedad, e inclusive del propio bloque gobernante, ahora hasta por la vía de los asesinatos. Ello, para no hablar de insurgencias como la del EPR, del ERPI y sobre todo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en el fondo alberga todo un proyecto para la reintegración de México, incluyendo ahora sí a sus pobladores originarios, los pueblos indios.

Así, el proyecto neoliberal de modernización equivale, al menos en México, a un proyecto de no-nación, porque prácticamente está despedazando y extranjerizando al país. Y porque, en el mejor de los casos, preserva la identidad de México sólo por otro rato, pero sin garantía alguna de un futuro largo, ya no digamos próspero.

INGREDIENTES DE UNA ALTERNATIVA

Ante un horizonte tan sombrío a la vez que injusto, desde luego que hay alternativas. Y de no haberlas, habría que inventarlas, y pronto, si México ha de evitar una muerte, digamos, por exceso de globalización.

Aquí sólo hay espacio para delinear algunos componentes y requisitos de esa alternativa. Podríamos simplificarlos de la siguiente manera:

1. Transitar de una vez por todas a un régimen en verdad democrático. Porque mientras una minoría –peor aún extranjerizada– siga tomando las principales decisiones, inevitablemente México acabará de desintegrarse.
2. Repensar el tipo de modernización que queremos. Ciertamente, no una que se mida con artificios macroeconómicos, ni que busque imitar modelos tan ajenos como engañosos. Más bien se requiere una modernización mo-

- desta pero nuestra y, por lo tanto, sólida, creíble. Y una que se mida, antes que nada, por nuestro avance en niveles tanto de bienestar como de autodeterminación y democracia.
3. Abrirnos al exterior, pero de manera sensata y sólo ante los imperativos reales (no ideologizados) y legítimos (no arbitrarios) de la globalización. Simultáneamente, para que esa apertura sea fructífera y no suicida, afincarla en una soberanía en verdad firme, popular: valga la redundancia. una soberanía democrática.
4. Delegar el cuidado cotidiano de esa soberanía, a un estado tan fuerte como digno; tan visionario como patriota; tan eficaz como democrático. Esto es, obviamente, un estado por completo diferente al de hoy.
5. Entonces sí, impulsar la privatización de todo aquello que resulte secundario para la seguridad –en sentido cabal y no militarista– de la nación. Pero aprovechar esa privatización para desconcentrar la riqueza; liberar la creatividad empresarial de todos los mexicanos e, inclusive, para ensayar formas nuevas de propiedad y de administración empresarial.
6. En contrapartida, redefinir de manera visionaria y democrática las actividades que por su importancia estratégica habrán de reservarse al estado; a un estado renovado conforme a los lineamientos ya apuntados.
7. Asegurar que ese estado cumpla con la responsabilidad de rendir buenas cuentas de su desempeño. Y que cumpla con la responsabilidad, si no de recuperar los espacios ya privatizados, al menos de poner un alto a toda privatización desnacionalizadora y/o extranjerizante y/o concentradora de la riqueza y/o fuente de mayores corruptelas.
8. Por lo pronto, poner un alto a la privatización de la industria petroquímica, a menos que se encuentre una fórmula que garantice una privatización democratizante y nacionalista.

De esa forma, u otra similar, podrían repararse los puentes –hoy decisivos y, sin embargo, hartamente maltrechos– entre la industria petroquímica, la soberanía y el proyecto de nación. Un proyecto en verdad nacional y

democrático; y, por lo mismo, un proyecto capaz de convertir a México en un sujeto activo –no más un objeto inerme– de la globalización. De paso, un proyecto para que México ayude a transformarla, junto con el

resto de América Latina, en una globalización democrática y democratizadora: con la participación de todas las naciones y orientada a globalizar, antes que nada, las oportunidades de desarrollo y de vida digna para todos.

QUORUM